|  |  |
| --- | --- |
| CIUDAD Y FECHA | **Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)** |
| REFERENCIA | **Expediente No. 11001333603420150055100** |
| DEMANDANTE | **ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA** |
| DEMANDADO | **NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL- POLICIA NACIONAL** |
| MEDIO DE CONTROL | **REPARACIÓN DIRECTA** |
| ASUNTO | **FALLO DE PRIMERA INSTANCIA** |

Agotado el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia en el proceso de **REPARACION DIRECTA** iniciado por **ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA** contra la **NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL - POLICIA NACIONAL**

* 1. **ANTECEDENTES:**
	2. **La DEMANDA**
		1. **PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

*“(…)* ***Primera.*** Sírvase declarar que las entidades demandadas, LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, son PATRIMONIAL. ADMINISTRATIVA. EXTRACONTRACTUALMENTE y solidariamente responsables de los perjuicios de tipo material en la modalidad de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO (artículo 1614 del Código Civil), y los perjuicios de tipo inmaterial a saber: PERJUICIOS MORALES de conformidad con los parámetros jurisprudenciales y la ALTERACION GRAVE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, por la

afectación de los derechos constitucionales fundamentales amenazados y/o vulnerados a saber: Derecho a la vida en condiciones de dignidad; Derechos de los niños; Derecho a escoger el lugar de domicilio; Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la libertad de expresión; Derecho a la libertad de asociación; Derechos económicos, sociales y culturales; Derecho a la unidad familiar; Derecho a la salud; Derecho a la integridad personal; Derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional; Derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; Derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; Derecho a una alimentación mínima; Derecho a la educación; Derecho a un vivienda digna; Derecho a la paz; y el Derecho a la igualdad, causados a los demandantes, en atención al daño antijurídico producido por los siguientes hechos victimizantes a los que se vieron injustamente sometidos los demandantes, así:

* Amenazas de Muerte y Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante, hecho ocurrido el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.

***Segunda.*** REPARACION PECUNIARIA - SUBROGADO PECUNIARIO - Como consecuencia de la declaración anterior, se condene al reconocimiento y pago, a título de indemnización por concepto de DAÑO MATERIAL en su modalidad de LUCRO CESANTE consolidado a favor de la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, víctima de desplazamiento forzado quien para la fecha de ocurrencia del irrogado perjuicio, era adulto y se encontraban desarrollando labores de agricultura y/o actividades domésticas en su lugar de residencia con un salario - jornal diario variable, sin que existiera vínculo laboral determinado, para la liquidación de este concepto, se solicita tener como referencia un periodo de dos (2) años a partir de la ocurrencia del hecho, interregno en el que la víctima padeció las consecuencias más relevantes del hecho dañino y recibió en forma directa su impacto, en razón de los ingresos dejados de percibir. Esta liquidación debe realizarse con la presunción de ingresos con base en el salario mínimo mensual vigente como mecanismo supletorio, así:

* A favor de la señora **ANA BERTILIA**, mayor de edad quien para la fecha de ocurrencia del hecho victimizante se encontraba trabajando en labores de agricultura y desarrollaba actividades en el hogar, la suma de VEINTICUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALESVIGENTES (24 S.M.L.M.V.), o la suma máxima reconocida por la jurisprudencia de conformidad con los fundamentos facticos.

***Tercera.*** REPARACIÓN PECUNIARIA - SUBROGADO PECUNIARIO - Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a las entidades demandadas a pagar a título de indemnización por concepto de PERJUICIOS INMATERIALES en su modalidad de PERJUICIOS MORALES, a favor de todos los demandantes, las sumas que se indicaran en la presente pretensión, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, documento final aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales, Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25 de septiembre de 2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales, en donde se estableció lo siguiente:

“**Perjuicio Moral.** El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima direua o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo. "

En observancia y cumplimiento del Acta precitada y la SENTENCIA ARQUIMED1CA en materia de desplazamiento forzado, dictada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Expediente 18.436 del dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), para el caso en concreto, conforme a la naturaleza y la intensidad del hecho dañino, la extensión y su gravedad frente a la afectación o lesión al derecho y/o interés legítimo de demandantes en calidad de víctimas directas, habida cuenta que se ha constatado dolor, sufrimiento, aflicción, pena moral, vergüenza y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra y aminoración en el patrimonio moral de cada una de las víctimas.

Por demás, sobre el perjuicio moral padecido por las victimas del desplazamiento forzado, el CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencias del 26 de enero de 2006, Radicación 25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, Radicación 190012331000200300385-01, con ocasión de los hechos sucedidos en LA GABARRA y en EL NA YA, se ha pronunciado con el siguiente tenáM

"Constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y mn la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional".

Asimismo, conforme a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente, doctor ALIER HERNÁNDEZ ENRÍOUEZ, en Sentencia del 6 de septiembre de 2001, EXPEDIENTE 13.232-15.646, en donde fijó el siguiente criterio:

* “Esta Corporación ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente el recurso a la aplicación analógica del Código Penal, para establecer el valor de la condena por concepto de perfuicio moral y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad."

Así las cosas, se solicita el pago de perjuicios morales en las siguientes cuantías:

* A favor de la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, en su calidad de víctima directa y jefe del grupo familiar, la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V.), o la suma máxima reconocida por la jurisprudencia de conformidad con los fundamentos fácticos.
* A favor del menor JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ, en su calidad de la víctima directa, representado legalmente por su progenitora, la suma de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M. V), o la suma máxima reconocida por la jurisprudencia de conformidad con los fundamentos fác ticos.
* A favor de la menor YESICA MA YERL Y CUEVAS FLOREZ, en su calidad de la víctima directa, representado legalmente por su progenitura, la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M. V), o la suma máxima reconocida por la jurisprudencia de conformidad con los fundamentos fácticos.

***Cuarta.*** REPARACIÓN PECUNIARIA - SUBROGADO PECUNIARIO - Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a las entidades demandadas a pagar a título de indemnización por concepto de PERJUICIOS INMATERIALES en su modalidad de ALTERACION GRA VE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, por la afectación de los derechos constitucionales fundamentales amenazados y/o vulnerados de los demandantes, a saber: Derecho a la vida en condiciones de dignidad; Derechos de los niños: Derecho a escoger el lugar de domicilio; Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la libertad de expresión; Derecho a la libertad de asociación; Derechos económicos, sociales y culturales; Derecho a la unidad familiar; Derecho a la salud; Derecho a la integridad personal; Derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional; Derecho d permanecer en el sitio escogido para vivir; Derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; Derecho a una alimentación mínima; Derecho a la educación; Derecho a un vivienda digna; Derecho a la paz; y el Derecho a la igualdad.

Sobre la ALTERACION GRAVE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, el Magistrado y doctrinante doctor ENRIQUE GIL BOTERO, en el libro "Temas de responsabilidad extracontractual del Estado",Editorial Comlibros, Tercera Edición del año 2006, ha precisado lo siguiente:

"Para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las-condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo ¡levaba y que evidencien efectivamente un trastrocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece

 Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita luna indemnización por concepto de PERJUICIOS INMATERIALES en su modalidad de ALTERACION GRAVE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, así:

A favor del grupo familiar demandante en su calidad de víctimas directas e indirectas de amenazas de muerte y Desplazamiento de desplazamiento forzado, la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SM.L.M.V), o la suma máxima reconocida por la jurisprudencia de conformidad con los fundamentos fácticos, en atención al daño antijurídico producido por los siguientes hechos victimizantes a los que se vieron injustamente sometidos los demandantes, así:

* Amenazas de Muerte y Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante, hecho ocurrido el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.

***Quinta.*** REPARACION NO PECUNIARIA - medidas de reparación integral

Con la finalidad de resarcir integralmente los daños padecidos por los demandantes, ordénese la adopción de medidas de reparación integral orientadas a restablecer el status quo más próximo al que se encontraban los demandantes, antes de los hechos victimizantes a los que se vieron injustamente sometidos, por ello, se solicitará la adopción de las siguientes medidas, asi:

a) En el evento de inexistencia de investigación penal por los hechos victimizantes padecidos por los demandantes, respetuosamente se solicita al señor Juez ordenar a las entidades competentes que inicien las investigaciones disciplinarias que en derecho correspondan, con la finalidad remediar la presunta omisión en que pudieron incurrir los funcionarios publicáis que tuvieron conocimiento del hecho victimizante y se sustrajeron del deber legal de oficiar a las autoridades competentes para que iniciara la respectiva investigación penal por el punible de Amenazas de Muerte y Desplazamiento Forzado, en términos de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la situación fáctica de los demandantes.

b) En el evento de inexistencia de investigación penal por los hechos victimizantes padecidos por los demandantes, respetuosamente se solicita al señor Juez oficiar a la entidad competente para lo de su cargo, en términos de la Ley 599 de 2000.

c) Para los eventos de sentencia que declare la responsabilidad de las entidades demandadas, respetuosamente se solicita al señor Juez ordenar la publicación de la parte resolutiva en un lugar visible, por un término de seis (6) meses, en las siguientes entidades:

* En todas las sedes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
* En el Comando y/o estación de Policía del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima. En el Comando y/o estación del Eje Departamento del Tolima.
* En el Comando y/o estación del ejercito del municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.
* En la Personería del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.
* En la Alcaldía Municipal de Chaparral, Departamento del Tolima.
* En la Secretaría de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T - 025 de2004, en la Corte Constitucional.
* En la Secretaría de la PROCURADURÍA DELEGADA PARA EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LOS DESMOVILIZADOS
* En la Secretaría de la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA -OACNUDH.

d) Ordénese a las entidades demandadas la adopción de las medidas preventivas que en derecho correspondan, con la finalidad de garantizar la protección a la vida, integridad de los demandantes y su derecho a la búsqueda de tutela jurídica de sus derechos, a través de la iniciación de la presente reclamación judicial.

e) Ordénese a las entidades demandadas la adopción de las medidas de protección que en derecho correspondan con la finalidad de proteger la vida y honra del grupo familiar demandante.

f) Ordénese a las entidades demandadas , suministrar el tratamiento psicológico adecuado al grupo familiar demandante, para superar las secuelas psicológicas causadas por las amenazas de muerte y el Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante por parte de los grupos armados al margen de la ley en desarrollo del conflicto armado interno colombiano.

***Sexta.*** Condénese a las entidades demandadas, a pagar las anteriores cantidades líquidas debidamente indexadas.

***Séptima.*** Condénese a las entidades demandadas, a pagar los respectivos intereses moratorias en términos del inciso segundo del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

***Octava.*** Ordénese a las entidades demandadas realizar el cumplimiento de la sentencia en términos de los artículos 192y 195 de la Ley 1437 de 2011.

***Novena.*** Condénese a las entidades demandadas a del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

***Décima.*** Reconózcase personería jurídica al suscrito apoderado en los términos de los mandatos conferidos (…)”

* + 1. Los **HECHOS** sobre los cuales basa su petición son en síntesis los siguientes:
			1. Los demandantes son víctimas directas e indirectas de graves violaciones contra los derechos humanos, por cuenta de las Amenazas de Muerte, Tratos Inhumanos, degradantes y Desplazamiento Forzado, atribuidos a grupos armados al margen de la ley pertenecientes a las FARC - EP, por los continuados hechos victimizantes que recayeron sobre sus vidas en el año 2010, cuando residían en vereda el cañón de las Hermosas, ubicado en el Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima y que han causado graves daños y perjuicios sistemáticos, personales, ciertos y subsistentes en los bienes jurídicos de los demandantes.



* + 1. Ninguno de los miembros del grupo familiar se encontraban afiliados al Sistema de salud.
		2. Informa la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que para el año de 1986 en la región había permanente presencia de miembros de las FARC - EP, quienes en repetidas ocasiones la amenazaron de muerte junto con su grupo familiar, por no acceder a sus peticiones, aunado a lo anterior, informa la demandante que en el año de 1987 su padre señor SILVESTRE FLOREZ, fue asesinado por miembros de este grupo insurgente.
		3. Este grave hecho ocasionó que la demandante se desplazara y/o migrara, hacía la ciudad de Bogotá D.C, lugar donde empezó a laborar en casas de familia, como empleada doméstica interna.
		4. La señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA manifiesta que en el año de dos mil diez (2010), se encontraba en una zapatería, esperando su turno para presentar entrevista laboral, cuando de repente se le acercó un individuo vestido de paño, con quien entabló conversación, y a quien le comentó su precaria situación económica.
		5. Manifiesta la demandante ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que el referido señor se presentó con el nombre de ANTONIO e inmediatamente le ofreció trabajo en una finca de su propiedad, ubicada en el Departamento del Tolima.
		6. Conforme a lo anterior, manifestó la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que junto con sus dos (2) menores hijos, se trasladó al Departamento del Tolima, a la finca propiedad del individuo referido, ubicada en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, lugar donde empezó a realizar funciones de empleada doméstica, y en ocasiones recogía y rosaba café.
		7. La demandante manifiesta que desde su llegada a la región advirtió la presencia de miembros de grupos armados ilegales, pertenecientes a las FARC- EP.
		8. Indica la demandante ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que en una ocasión, en las horas de la mañana, ella se levantó a realizar sus deberes laborales, percatándose que su empleador no se encontraba en el inmueble. Al día siguiente, mientras se encontraba desyerbando y/o limpiando el café, llegaron a la finca, tres (3) individuos uniformados y armados, quimes se identificaron como miembros de las FARC - EP, y le manifestaron que ella era una persona desconocida en la región y además informante del Ejército Nacional, que debía abandonar inmediatamente la región.
		9. Ante la situación de violencia, la señora ANA BERTILLIA FLOREZ MURCIA manifestó a los miembros del grupo subversivo, que no contaba con dinero para irse de la región, por lo que esperaría hasta el regreso de su empleador.
		10. Manifiesta la demandante que los miembro del grupo armado ilegal, le dieron un plazo de doce (12) horas para irse de la región, o de lo contrario sería asesinada junto con sus menores hijos.
		11. Manifiesta la demandante que al día siguiente nuevamente llegaron a la finca los mismos cuatro (4) miembros de las FARC -EP, uniformados y armados. Asimismo, manifiesta la demandante haber reconoció a su presunto empleador dentro de los cuatro (4) subversivos.
		12. La demandante, manifiesta que su empleador ANTONIO, era miembro de las FARC - EP, y que la agredió físicamente empujándola y pegándole con el fúsil en la pierna derecha; además, le ordenó abandonar la región de inmediato o de lo contrario sería asesinada junto con sus menores hijos.
		13. Según información suministrada por la demandante, sus menores hijos se ocultaron entre los matorrales de la finca, porque temían por sus vidas, al final, salieron por el monte hacia la carretera y en el camino fueron auxiliados por un menor de edad, quien les ayudó a ubicar el paradero de un autobús con destino a la ciudad de Bogotá D. C.
		14. Sin recursos económicos para pagar un arrendamiento y/o empezar un nuevo proyecto de vida, la demandante junto sus menores hijos tuvieron que migrar y/o desplazarse a la ciudad de Bogotá.
		15. Manifiesta la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), llegó al Terminal de Bogotá D.C, y tuvo que solicitarle a una señora dinero y orientación, para transportarse al Barrio Soacha Compartir, lugar donde le brindaron hospedaje y alimentación por un (1) día.
		16. La demandante manifiesta no haber puesto en conocimiento de las autoridades locales competentes estos hechos delictivos, porque se sentía desprotegida teniendo en cuenta que en la zona no había presencia permanente de la Fuerza Pública, además, sentía mucho temor por las represalias violentas que pudieran tomar los subversivos al enterarse de cualquier denuncia.
		17. El día veinticinco (25) de Agosto de dos mil diez (2010), la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, rindió declaración juramentada ante la Personería Delegada para los Derechos Humanos - UAO Puente Arando, sobre los hechos victimizantes padecidos por su grupo familiar el día anterior.
		18. Para ese mismo interregno la demandante junto con sus dos (2) menores hijos, padecieron las más agudas necesidades y penurias económicas, por cuenta de la falta de empleo y ausencia de ingresos fijos para garantizar la mínima subsistencia del grupo familiar, y aún más importante la garantía de los derechos de los hijos menores de edad.
		19. De otra parte, la demandante al encontrarse pasando por una situación precaria económica, instauró Derecho de Petición el treinta y uno (31) de septiembre de dos mil dos (2002), ante la Subdirectora, señora MARLENE MESA SEPÚLVEDA, de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social - hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, solicitando: i) Prorroga de la Ayuda Humanitaria, ii) Inclusión de La demandante en subsidio de vivienda, iü) Ordenar afiliación sistema de Seguridad Social, iv) Ordenar inclusión en programas de capacitación educativa permanente, v) Información trámites para la solución de ayuda económica para proyectos productivos.
		20. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, consigno ayuda humanitaria, a nombre de La demandante por un valor de novecientos treinta mil ($930.000) pesos, dinero retirado el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil doce (2012).
		21. Asimismo, manifiesta la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA que junto con su grupo familiar que los daños inferidos por los hechos victimizantes padecidos han sido de gran magnitud para sus vidas, y que se resumen de la siguiente forma:
* Daños psicológicos inferidos por las amenazas de muerte, desplazamiento forzado, la violencia física y sicológica, tratos inhumanos y degradantes y la pérdida del status quo de vida.
* Daños morales inferidos, principalmente por la aminoración de la dignidad, el dolor, la angustia, la tristeza, la miedo, ruptura familiar y los sentimientos de miedo.

* Daños materiales inferidos por los gastos de transporte del desplazamiento forzado, los gastos por concepto de pago de cánones de arrendamiento, alimentación, transportes y servicios públicos, en la ciudad de Bogotá D.C.
* La pérdida de oportunidad de los ingresos que generaban de las actividades realizadas antes los hechos victimizantes.
	+ 1. Los hechos victimizantes que recayeron sobre los bienes jurídicos protegidos de los demandantes, causaron un profundo dolor, aflicción y en general sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, aminoración moral, zozobra y la pérdida del status quo de vida.
		2. Estos hechos victimizantes también causaron un connotado cambio negativo de vida en los demandantes que hasta la fecha, no comprenden porque tenían que vivir tan delicada situación por cuenta del conflicto armado interno Colombiano, y aun se sienten reducidos, humillados, desprotegilws y en circunstancias de indignidad e indigencia en un lugar distinto al escogido por ellos para vivir, lo que les ha producido gran aflicción, congoja, dolor profundo y afectación a la unidad familiar y además, desadaptación y desprendimiento social con su nuevo entorno.
		3. Según información suministrada por los demandantes, para las autoridades Locales y Departamentales era de pleno conocimiento la situación de peligro colectivo que se vivía en el Municipio de Chaparral, Tolima, entre los años 2007 al 2010, por cuenta de la presencia de grupos al margen de la ley que causaban graves violaciones contra los Derechos Humanos de los pobladores, y a pesar de lo anterior, la Fuerza Pública no garantizó la eficiente protección de los derechos y bienes del grupo familiar convocante.
		4. Los daños antijurídicos a los que se vieron sometidos los demandantes fueron producto del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones legales y constitucionales de las autoridades públicas demandadas, esta conducta anormalmente defectuosa de la fuerza pública incumplió los fines esenciales del Estado, al tenor del artículo 2o superior, y V\ausó graves daños y perjuicios en la vida, honra, bienes, seguridad, paz, tranquilidad y demás derechos y libertades constitucionales de los demandantes.
		5. Existió negligencia, falta de cuidado e imprevisión del Estado y esto posibilito la actuación de los grupos al margen de la ley en la causación de los daños inferidos a los demandantes.
		6. Las amenazas de muerte y el desplazamiento forzado de los demandante serán hechos previsibles, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima; sin embargo el dirigida a evitar estos hechos.
		7. Las entidades demandadas omitieron la adopción de medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creado por la presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona.
		8. Teniendo en cuenta los hechos victimizantes aquí relacionados, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reconoció e incluyó en el Registro Único de Víctimas - RUV, a los demandantes como víctimas de desplazamiento forzado desde el 20 de Abril de 2010.
		9. Los demandantes, han radicado varias peticiones ante LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y ANTE LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DE LOS DESMOVILIZADOS informando su crítica situación económica y solicitando infructuosamente, entre otras, el pago inmediato de la indemnización por vía administrativa y la aplicación de los efectos ínter comunis, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en la SENTENCIA SU-254 DE 2013.
		10. Los demandantes tienen DERECHO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL, en términos del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Asimismo, en términos de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, tienen derecho a perseguir una reparación integral en sede judicial que comprenda la reparación de daños materiales e inmateriales, en razón de la responsabilidad del Estado en materia del desplazamiento forzado. Esta reparación debe comprender medidas pecuniarias y no pecuniarias.
		11. El día 24 de abril de 2015, los demandantes radicaron ante la Procuraduría General de la Nación, una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho en materia contencioso- administrativa, convocando al extremo pasivo de la presente acción, con el objeto de explorar todas las posibilidades jurídicas tendientes a concretar un acuerdo conciliatorio a fin de buscar una indemnización integral que resultara proporcional a la totalidad de los daños y perjuicios causados, en atención al daño antijurídico producido por las amenazas y el Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante, hecho ocurrido el día 24 de marzo de 2010, en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.
		12. El día 17 de junio de 2015, la Procuraduría 6 Judicial (II) para asuntos Administrativos, dentro de la radicación No. 119 - 2015, expidió constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, de conformidad con lo establecido por artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.
		13. Finalmente hasta la fecha, las entidades demandadas no han indemnizado los daños y perjuicios causados a los demandantes, en atención al daño antijurídico producido por las Amenazas de Muerte y Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante, hecho ocurrido el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.
	1. **LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**
		1. La apoderada de la **POLICIA NACIONAL** se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones en los siguientes términos: *“(…) Frente a los perjuicios solicitados, es necesario remitirse a la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado[[1]](#footnote-1), que fijó los parámetros que tener en cuenta los jueces administrativos al momento de reconocer indemnizaciones cuando se reclamen perjuicios inmateriales, pues si bien el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, se exige además de la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que se requiere también que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.*

*Lo anterior para reafirmar que la sola mención de unas supuestas afectaciones de distintos tipos a los demandantes, no traen consigo una indemnización de perjuicios, debido a que como se explica, los daños inmateriales aquí solicitados requieren de una acreditación que no puede realizar únicamente el apoderado de la parte actora, ya que carece de idoneidad para declararlo, en este orden de ideas para que se establezca que hubo daños psicológicos, los demandantes deben ser valorados por un experto, que logre determinar el grado de afectación que se produjo en cada uno, lo cual no se encuentra ni documentado, ni soportado por ningún otro medio probatorio dentro del proceso, es decir que este es un juicio que está realizando únicamente el apoderado de los demandantes a pesar de carecer de la experticia para hacerlo.*

*Lo mismo ocurre cuando afirma la existencia de daños morales, ya que de acuerdo a sus especiales características no pueden ser simplemente enunciados a voluntariedad o decisión del togado y los demandantes, si no que requieren de una demostración idónea y objetiva sobre los mismos.*

En cuanto a los daños materiales, se reitera lo expresado sobre esta misma materia, en cuanto no existe evidencia del bien inmueble que la actora tuvo que abandonar, y mucho menos se hace la determinación clara de otros bienes muebles o inmueble de propiedad del señor JOSE JOAQUIN APANGO HERNANDEZ, tampoco reposa en el plenario constancia que logre demostrar la existencia de algún tipo de vínculo laboral del demandante.

Así mismo debe indicarse que pese a que la demandante hace referencia a que fue despojada de sus bienes y tierras, al igual que dejo de percibir una productividad de su finca, es de establecer que con la demanda no aporto prueba siquiera sumaria, que permita determinar que en efecto tenía la propiedad sobre bien alguno, es mas no especifica qué tipo de bienes tenia, tampoco describe los linderos y características topográficas o de ubicación de la finca en que supuestamente se encontraba a título de poseedora, no existe contrato de arrendamiento, pago de sen/icios u otro documento que permita determinar que residía para la época de los hechos en el lugar a que hace mención fue obligada a desplazarse.

*Consideraciones por las cuales me opongo a las pretensiones de la demanda, debido a que carecen de fundamentos legales y respaldo probatorio, razón por la cual solicitamos al honorable Juez, mantener la imparcialidad que caracteriza a nuestro sistema judicial, y que en la sentencia se nieguen las suplicas de la demanda. (…)”*

Propone como **EXCEPCIONES:**

|  |
| --- |
| ***FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA****Frente a la legitimación en la causa el H. Consejo de Estado ha diferenciado la legitimación en la causa de hecho y la material, entendido por la primera aquella de la cual se predica de la relación nacida con la presentación de la demanda y su correspondiente notificación, mientras que la segunda tiene que ver con la conexión de los hechos con la parte accionada, en este caso, la Policía Nacional teniendo en cuenta que del traslado allegado no se encuentra prueba alguna que relacione los hechos con la entidad Policía Nacional, lo cual se traduce de acuerdo a lo anotado en una falta de LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA. Así lo sostuvo el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo:* *"(...) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.**De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carece de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores.* *En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae dilicudar si existe o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realidad, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”.**Tal y como lo señala el demandante, los desplazamientos forzados se realizaron en muchas regiones debido a las incursiones de grupos armados al margen de la ley sin que se señale taxativamente los hechos en que se configura responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y así defenderse la entidad de los señalamientos que le hacen.* *De conformidad con el artículo 218 la ley organizará el cuerpo de Policía, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.**No es el Ministerio de Defensa Nacional el encargado de realizar la reparación integral de cada víctima o familia, de la población desplazada es la Unidad de Reparación Integral para victimas ya que la misma tiene múltiples funciones como: Reparación individual de víctimas, reparación colectivas, Enfoque Sicosocial, Estrategia de recuperación emocional a nivel grupal, Fondo Nacional de Reparación.**En relación con la Legitimación en la causa por pasiya el H. Consejo de Estado ha señalado:**"En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte demandada y su interés jurídico, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, favorable al demandante o a las demandadas.**Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” de forma tal, cuando una de las las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.* *Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.**Al respecto, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:**"(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la leyotorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (…)”* *Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las pretensión procesal, es decir, de la atribución de la conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, sino que tiene derecho el demandado a ser absuelto, no porque el haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo ataco no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo- no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante, se le negarán las pretensiones no poque los hechos en que se sustenten no l den el derecho, sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y , por eso, el demandado debe ser absuelto”.* |
| ***HECHO DE UN TERCERO****El daño alegado por los demandantes no es imputable a la Policia Nacional ya que fueron ocasionados por personas ajenas al ente militar, configurándose la causal eximente de responsabilidad como lo es el HECHO DE UN TERCERO. Frente a esta eximente de responsabilidad ha dicho el Consejo de Estado en sentencia del 26 de febrero de 2009 radicado 05001-23-31-000-1997-01203-01:**“… Si bien, los testigos identificaron como presuntos autores de la masacre a un grupo paramilitar dentro del cual se encontraban dos miembros del ejército nacional, dicha acusación se fundamentó en el hecho de que entre ellos se llamaban recíprocamente Capitán Pérez y Cabo Sarmiento, sin embargo, la prueba documental trasladada del proceso disciplinario iniciado por la Personería Municipal de Valdivia, da cuenta de que para la fecha de los acontecimientos no se encontraban tropas de mando del Ejército en el sector de la vereda juntas, jurisdicción del municipio de Valdivia, se encontraba el Batallón de Infantería Girardot, quien realizaba las operaciones militares en el sector de la vereda juntas de Valdivia. Ahora, la sala concluye que para la fecha de los hechos no se realizaron operaciones militares en jurisdicción de la vereda juntas del municipio de Valdivia y que dentro de las filas, si bien estaban vinculados un capitán de apellido Pérez y un cabo de apellido sarmiento, los mismos no pudieron estar presentes en el momento de la masacre, como quiera que se encontraban, el primero en otra región según el material probatorio analizado, y el segundo, detenido por la presunta comisión de un delito. La sala concluye, que los hechos que dieron lugar al daño fueron producidos por el actuar de un grupo armado ilegal, que ingreso a las veredas juntas y el silencio en el municipio de Valdivia, causando la muerte de los señores Juan Bautista Baena, Elián Darío Madrigal e Hipólito González y no se demostró participación alguna del Ejercito Nacional. En síntesis, no existe criterio de imputación material, que permita vincular la conducta o comportamiento de la administración con los actos o hechos desencadenantes del daño, en consecuencia no le es imputable al estado, como quiera que el resultado, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso solo puede ser atribuido a la conducta de un tercero. En consecuencia resulta estéril cualquier análisis de los fundamentos o sistemas de responsabilidad tradicional u objetivos, porque nos encontramos en presencia de una falta absoluta de imputación de la administración. No se acredito que al demandado le fuera atribuible, las muertes motivo de la demanda en este proceso, y nos encontramos así, entonces, frente a una eximente de imputación del daño antijurídico”* *Resulta pertinente precisar que es imposible hacer omnipresencia en todos los lugares en el mismo momento más aun en una época donde se encontraba turbado el orden público en muchas zonas del país. No se encuentra demostrado amenaza inminente alguna como tampoco denuncias de un hecho en particular que diera origen o razón de los desplazamientos y en consecuencia permitiesen prever a las Fuerzas Militares y de Policía lo acontecido, por tanto NO EXISTE OMISIÓN por parte del MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL en los hechos alegados.**Respecto al conocimiento del hecho por parte de las autoridades, el H. Consejo de Estado ha dicho:*"... Las autoridades públicas tenían la posibilidad de interrumpir el proceso causal, porque tuvieron conocimiento previo de que el hecho se iba a producir Ante esas informaciones en las que claramente se anunciaba y preparaba la incursión paramilitar en el área del Catatumbo, con el fin de disputar con la guerrilla el dominio sobre la zona, las autoridades militares y de policía no tomaron ninguna medida eficaz tendiente a impedir que se produjera el enfrentamiento armado, con el consecuente riesgo que ese hecho representaba para sus habitantes. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso.(...) Se concluyó de las pruebas que obran en el expediente, que la incursión paramilitar en La Gabarra no sólo era previsible, por haber sido anunciada públicamente por el jefe de esa organización criminal, sino que, además, fue conocida por la autoridad policiva de la región, que abusando de sus funciones contribuyó a la producción del hecho[[2]](#footnote-2)".*Pues bien, en el caso que nos convoca, no se encuentra demostrado que la Policía Nacional por intermedio de sus agentes hayan contribuido con la acción de estos grupos, lo que exime de toda responsabilidad a la entidad pública antes mencionada.**Por su parte el H. Consejo de Estado respecto a la RELATIVIDAD DE LA ACTUACION DEL ESTADO,**ha dicho:*"De otro lado, también es cierto que la jurisprudencia de esta Sección ha considerado la relatividad de las obligaciones del Estado[[3]](#footnote-3), esto es que no le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas cuando son causados por los particulares, en consideración a que las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que "nadie está obligado a lo imposible[[4]](#footnote-4)".*En el mismo sentido el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la relatividad de las obligaciones del Estado, había dicho:**"... Como* lo ha precisado la Corporación en otros pronunciamientos, los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe, entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia. Tampoco se presenta un riesgo concreto y excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones. No podría pensarse, por lo demás, como lo pretende la parte actora, que el Estado está obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito. Si bien aquél tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse, a partir de ello, que sea responsable de su comisión en todos los casos, ya que sólo pueden considerarse imputables a él cuando han tenido por causa la acción o la omisión de uno de sus agentes, como podría ocurrir con el delito de terrorismo, en aquellos eventos en los que, como sucedió en varios de los casos citados en la primera parte de estas consideraciones, la acción de los antisociales fue facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo por causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ésta$ quienes resultaron afectados.(...) En efecto, con base en el análisis de los casos antes citados, se concluye que el Estado solo fue condenado en aquéllos en que no se pudo establecer la existencia del hecho de un tercero como causal de exoneración de acción u omisión del Estado. Y para ello, la Sala debió precisar, en cada caso, cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección. Es esta la razón por la cual se acudió, en algunos eventos, al concepto de la relatividad de la falla del servicio, que más precisamente alude a la relatividad de las obligaciones del Estado y, por tanto, permite determinar, en cada situación particular, si el daño causado resulta o no imputable a la acción u omisión de sus agentes. En otros eventos, como se vio, la imputabilidad surge de ña creación de un riesgo que es considerado excepcional, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”.*Se tiene que los accionantes solicitan se declare al Ministerio de Defensa- Policía Nacional responsable de la grave alteración de sus vidas en condiciones de dignidad, asó como los perjuicios morales y materiales ocasionados por el fenómeno de desplazamiento forzado.* *Con relación a esto Honorable Juez, me opongo a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque no se establece de manera clara la relación de causalidad existente entre los accionantes y los hechos alegados, en relación con el actuar de mi defendida; teniendo en cuenta que no se prueba la imputación a la entidad demandada ya que se observa claramente que los hechos alegados fueron consecuencia del HECHO DE UN TERCERO, pues dicho desplazamiento fue consecuencia, tal como ellos lo menciona en el presente medio de control, de la incursión d grupos al margen de la ley en el Departamento de Tolima lo cual configura CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado.* |
| ***FALTA DE CONFIGURACION Y ESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.****No se vislumbra OMISIÓN por parte de LA ENTIDAD QUE REPRESENTO FRENTE A ALGUNA Alerta Temprana, Denuncias u otras similares que dieran cuenta de un hecho en particular que fuese a ocurrir, en consecuencia no se logra vislumbrar la configuración y la consecuente estructuración de los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado en el caso que nos convoca.* *Al respecto de la responsabilidad del estado, el H. Consejo de Estado ha manifestado:**"... El artículo 90 constitucional dispone que El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la Jurisprudencia de esta Corporación. Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional con el daño sufrido. Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración”* |
| ***EXISTENCIA DE POLITICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LA REPARACION POR DESPLAZAMIENTO FORZADO.****Es importante señalar que el Gobierno Nacional ha implementado políticas de indemnización para los desplazados por la violencia en Colombia las cuales se encuentran establecidas en la Leyes 975 del 2005 y 1448 del 2011.**La población desplazada por la violencia para obtener el derecho a la reparación tiene diferentes vías institucionales: de un lado, el acceso a la reparación a través de la vía judicial penal, regulada por la Ley 975 de 2005 para los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, mediante un incidente de reparación integral de los daños causados; de otro lado, la vía judicial contencioso administrativa; y finalmente la vía administrativa.**La Corte Constitucional se refirió a la aplicación del Decreto 1290 de 2008, sobre reparación individual vía administrativa. En esta providencia la Corte aclaró lo siguiente: que tal normatividad (i) comprendía regulaciones dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, (ii) colocaba en cabeza de Acción Social el programa de reparación individual, (iii) establecía el principio de solidaridad como base de la reparación individual administrativa por violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas atribuibles a grupos armados al margen de la ley, (iv) estipulaba quiénes eran destinatarios o beneficiarios de tal derecho, y (v) establecía cuáles eran las medidas de reparación, (vi) cuáles eran los diferentes programas de los distintos organismos del Estado que debían hacerse cargo de esas medidas, y (vi) cuáles eran los trámites y plazos para el reconocimiento de la indemnización, entre otras disposiciones[[5]](#footnote-5).**En sentencia de Acción de tutela T-458 de 2010 la Corte Constitucional se refirió a las distintas vías institucionales para obtener el derecho a la reparación.**En primer lugar, mencionó la vía judicial penal regulada por la Ley 975 de 2005, para los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, a través de un incidente de reparación integral de los daños causados, siendo los victimarios los primeros obligados a reparar a las víctimas, subsidiariamente y de manera solidaria el grupo criminal al que pertenezcan los perpetradores del ilícito y, residualmente, el estudio de responsabilidad del Estado.**En segundo lugar, se refirió a la vía administrativa regulada hasta ese momento por el Decreto 1290 de 2008 a través del programa de reparación individual vía administrativa para las víctimas de grupos armados al margen de la ley, recordando la obligación del Estado de facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por la vía judicial como por la vía administrativa. En este sentido, enfatizó la Corte que las entidades encargadas "no* pueden imponer requisitos que impliquen para las víctimas una carga desproporcionada, porque no puedan cumplirlos, porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o porque se vulnere su dignidad. No obstante, las víctimas conservan la obligación mínima de presentarse ante la entidad correspondiente y solicitar el acceso a los programas" *(Énfasis de la Sala).**Así mismo, en este pronunciamiento la Corte reiteró los criterios fijados por la sentencia C-1199 de 2008, en cuanto a la diferenciación entre las medidas de reparación y las medidas de otros programas sociales que presta el gobierno de manera ordinaria en materia de políticas públicas de vivienda, educación y salud, y de la asistencia humanitaria en caso de desastres. Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria complementariedad que debe existir entre estas medidas.* |
| ***INEXISTENCIA DE CONFIGURACION******DEL ELEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD: IMPUTACION****El daño para ser indemnizable exige entre otros requisitos, el denominado de certeza, relacionado con la realidad de su existencia, en consecuencia se opone a cualquier concepto de daño hipotético eventual. .**En el caso que nos ocupa no presenta el apoderado de la parte demandante prueba que involucre la responsabilidad de la Entidad, toda su demanda la sustenta en manifestaciones fácticas sin soporte alguno.* |
| ***LA INNOMINADA****Interpongo esta excepción frente a toda situación de hecho y/o derecho que resulte probada en el presente proceso y que beneficie los intereses de la entidad que represento.**Solicito el reconocimiento oficioso, en la sentencia, de los hechos que resulten probados y que contribuyan una excepción de fondo. Fundamento la petición en el artículo 282 del C.G.P.* |

* + 1. El apoderado del **EJERCITO NACIONAL** se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones en los siguientes términos: *“(…) Se demanda al Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, y otras entidades de la rama ejecutiva del poder público, con el fin de que se declare administrativamente y patrimonial responsable de manera solidaria por la totalidad de los daños de tipo material en la modalidad de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO (artículo 1614 del Código Civil), y los perjuicios de tipo inmaterial a saber: PERJUICIOS MORALES de conformidad con los parámetros jurisprudenciales y la ALTERACION GRAVE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, por la afectación de los derechos constitucionales fundamentales amenazados y/o vulnerados a saber: Derecho a la vida en condiciones de dignidad; Derechos de los niños; Derecho a escoger el lugar de domicilio; Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la libertad de expresión; Derecho a la libertad de asociación; Derechos económicos, sociales y culturales; Derecho a la unidad familiar; Derecho a la salud; Derecho a la integridad personal; Derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional; Derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; Derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; Derecho a una alimentación mínima; Derecho a la educación; Derecho a un vivienda digna; Derecho a la paz; y el Derecho a la igualdad, causados a los demandantes, en atención al daño antijurídico producido por los siguientes hechos victimizantes a los que se vieron injustamente sometidos los demandantes* con ocasión de las Amenazas de Muerte y Desplazamiento forzado del grupo familiar demandante, ocurrido el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010) en la vereda Cañón de las Hermosas. Municipio de Chaparral - Departamento del Tolima

*Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA -, a pagar a título de indemnización por los daños ocasionados a la señora* ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA Y SU NUCLEO FAMILIAR *en su condición de víctima, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, como a la reparación no pecuniaria tendiente a buscar la adopción de medidas de reparación integral, con la finalidad de resarcir integralmente los daños padecidos por los demandantes, orientadas a restablecer el status quo más próximo al que se encontraban los demandantes, antes de los hechos victimizantes a los que se vieron injustamente sometidos*

*Que se condene a pagar las anteriores cantidades líquidas debidamente indexadas, como también los respectivos intereses moratorios en términos del inciso segundo del artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, al pago de las constas procesales en los términos de artículo 188 ibidem. (…)”*

Propuso como **excepciones**:

|  |
| --- |
| **CADUCIDAD POR DESPLAZAMIENTO FORZADO y MUERTE DEL SEÑOR SILVESTRE FLOREZ**Se interpone esta excepción en contra de las pretensiones de la demanda relativas a falla del servicio, de mis representadas frente al desplazamiento forzado causado en la parte actora.El literal i, numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no modificó el término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo anterior como vemos así quedo actualmente establecido con la reforma:"*Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:**(...) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:**...i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia."*De igual forma es claro que la acción de reparación directa, por los daños relacionados con secuestro, asesinato colectivo, daños sobre bienes y amenazas de muerte se encuentra caducada.En concordancia con lo anterior el Consejo de Estado en caso similar expuso:*11 En efecto, de la lectura de la demanda incoada se concluye que la misma pretende la reparación del daño causado como consecuencia de dos hechos: (i) la situación de desplazamiento a que se vieron avocados los actores, como quiera que en 1988, 1999 y 2004, dada la presión de los grupos armados al margen de la ley EPL, FARC y AUC, tuvieron que abandonar el predio rural de su propiedad ubicado en la vereda Tucura, corregimiento de Batatas, municipio de Tierralta, Córdoba y (¡i) la ocupación del inmueble referido desde el año 2004 por 43 familias en situación de desplazamiento forzado que, según los actores, están "a/ mando del señor Femando Pico, lugarteniente del señor Adolfo Paz alias Don Berna".**4.1 Respecto del primer hecho, de acuerdo con los hechos narrados en el libelo, en virtud de la normalización del orden público en la región y la expedición por el INCODER de la Resolución n.° 605 del 28 de marzo de 2006, que aceptó la solicitud de protección del predio rural ilPuerto Rico", en el año 2007 los demandantes llegaron a un acuerdo con esa entidad para transferir el dominio sobre la hacienda por la suma de $1.167.971.289, negocio jurídico que se frustró debido a que venta que no se pudo realizar debido a que, según advirtió la Defensorio del Pueblo Regional Córdoba a los actores, en el año 2004 el predio fue ocupado por 43 familias en situación de desplazamiento forzado.**En este sentido, la Sala encuentra que en concordancia con el artículo 16 de la Ley 387 de 1997 11 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia", la situación táctica a la que se alude en la demanda culminó cuando las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad " de los demandantes.*Lo anterior si se considera que, por mandato legal, la condición de desplazado cesa cuando las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido.Al respecto, es razonable concluir que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de segundad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 de la Ley 387 de 1997. De hecho, a esta conclusión ya había llegado la Subsección C en auto de 26 de julio de 2011 (expediente 41037, CP. Enrique Gil Botero) :*"...el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver"* (negrilla fuera del texto).*Por lo anterior, la Sala estima que en el presente caso la acción se encuentra caducada, porque, según lo sostenido en el libelo, en el año 2007 "se normalizó la situación de orden público en la región", es decir, se dieron las condiciones de seguridad para el retorno en los términos del artículo 16 de la Ley 387 de 1997, razón suficiente para considerar que a partir de ese momento empezó a correr el plazo de dos años previsto en el artículo 136.8 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa orientada a obtener el resarcimiento del daño causado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los demandantes ."**Como vemos a pesar de que el desplazamiento se trata de un daño continuado, no quiere decir que haya desaparecido la caducidad. Porque es claro que en las zonas que afirman los demandantes haber sufrido desplazamiento forzado, se configuraron claras condiciones para que pudieran volver a sus lugares de origen, porque el gobierno nacional, creó sendas políticas de atención y protección de la población desplazada, restitución de tierras, proceso de justicia y paz, entre otros mecanismos, que buscaron el restablecimiento de las condiciones de vida de las personas afectadas.*Ahora bien en concordancia con lo anterior, al ser el desplazamiento forzado, un delito de lesa humanidad, se deben tener especiales consideraciones, así como lo estableció la honorable Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-254 de 24 de abril de 2013:Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo v no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por la sentencia C-099 de 2013, que declaró exequibles los incisos 2 y 3 del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado, que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiendo descontarse de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (Negrillas fuera de texto)La misma corte en auto 182 de 2014, al analizar la fecha de ejecutoria de la sentencia de unificación SU-254 de 2013, expuso:*"...En* consecuencia, la Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante publicación en el diario "EL TIEMPO", el 19 de mayo de 2013 notificó la sentencia SU-254 de 2013, reproduciendo en su integridad la parte resolutiva de la misma.17. Aunado a lo anterior, resulta necesario precisar que, aún y cuando no existe norma expresa que señale el término de la ejecutoria de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo cuarto del citado Decreto 306 de 1992,[U]resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 331 de la norma procesal civil, cuyo tenor literal reza:"ARTÍCULO 331.Modificado por el art. 34, Ley 794 de 2003 Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta.En el presente caso, y sin perjuicio de las labores adelantadas por los jueces de primera instancia en virtud del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se puede concluir, de una parte, que la fecha de notificación del referido fallo de unificación se remonta al pasado 19 de mayo de 2013 y de otra, que dicha sentencia se encuentra plenamente ejecutoriada."En plena concordancia con lo anterior el Consejo de Estado había expuesto en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2012, radicación 23001-23-31-000-2010-00380-01(40177):"En este sentido, la Sala encuentra que en concordancia con el artículo 16 de la Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia", la situación táctica a la que se alude en la demanda culminó cuando las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad[[6]](#footnote-6)" de los demandantes. Lo anterior si se considera que, por mandato legal, la condición de desplazado cesa cuando las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido.Al respecto, es razonable concluir que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 de la Ley 387 de *1997. De* hecho, a esta conclusión ya había llegado la Subsección C en auto de 26 de julio de 2011 (expediente 41037, CP. Enrique Gil Botero)[[7]](#footnote-7):"...el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver" (negrilla fuera del texto).La Ley 387 de 1997, define el desplazado: como toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.Con fundamento en las anteriores consideraciones para el caso de la Señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, se tiene que el presunto daño alegado tiene inicialmente como reseña la presencia de miembros de las FARC-EP para el año de 1986 en la vereda Bajo Ceiba- Municipio de Bolívar - Departamento de Santander, donde argumenta la parte actora era titular de una vivienda, y que como consecuencia de las constantes amenazas de muerte que fueron objeto, y del posterior homicidio del Señor SILVESTRE FLOREZ. Se vio obligada a desplazarse a la ciudad de Bogotá,Que una vez, encontrándose en la ciudad de Bogotá, conoció a un hombre llamado Antonio, quien le ofreció trabajo en una finca de su propiedad, ubicada en el Departamento del Tolima, ante lo cual, como lo indica el mismo apoderado la Señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, se trasladó al Departamento del Tolima, a la finca propiedad del individuo referido, ubicada en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, advirtiendo presencia de las FARC en la región, indica que desyerbando y/o limpiando el café, llegaron a la finca, tres (3) individuos uniformados y armados, quienes se identificaron como miembros de las FARC — EP, y le manifestaron que ella era una persona desconocida en la región y además informante del Ejército Nacional, que debía abandonar inmediatamente la región otorgándole un tiempo de 12 horas para abandonar la región, de lo contraria seria asesinada junto con sus menores, la parte actora expresa que la Señora FLOREZ MURCIA, no contaba con dinero para irse de la región, por lo que esperaría hasta el regreso de su empleador, quine resulto ser mimbro de las FARC- EP, como quiera que fue el sujeto que la agredió físicamente empujándola y pegándole con el fúsil en la pierna derecha. Lo que finalmente conllevo a que la parte demandante saliera de la región con destino a la ciudad de Bogotá, sin recursos para emprender un nuevo proyecto de vida, arribando el día 24 de marzo de 2010 a la ciudad de Bogotá municipio de Soacha, donde le brindaron hospedaje y alimentación. Vista la cita jurisprudencial como las fechas de ocurrencia de los hechos se tiene que se ha superado el termino para interponer el medio de control de reparación directa, en consecuencia ruego su señoría declarar probada la excepción, por advertirse que se ha superado ampliamente el término establecido por el Legislador. |
| **FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZAS MILITARES****ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**No se prueba por parte de la demandante cuales fueron las acciones u omisiones en que incurrió el Ministerio de Defensa Nacional 4 Ejercito Nacional - Armada Nacional respecto de las hechos atribuidos a los Grupos Armados margen de la Ley por los continuados hechos victimizantes que recayeron sobre la vida de la parte actora, más exactamente por los hechos registrados por la presencia de miembros de las FARC-EP para el año de 1986 en la vereda Bajo Ceiba- Municipio de Bolívar - Departamento de Santander, y posteriormente en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, advirtiendo presencia de las FARC en la región, indica que desyerbando y/o limpiando el café, llegaron a la finca, tres (3) individuos uniformados y armados, quienes se identificaron como miembros de las FARC — EP, y le manifestaron que ella era una persona desconocida en la región y además informante del Ejército Nacional, que debía abandonar inmediatamente la región otorgándole un tiempo de 12 horas para abandonar la región, de lo contraria seria asesinada junto con sus menoresNótese Señora Juez, que tal y como lo afirma el apoderado de la parte actora, los hechos corresponden al actuar delictivo de los miembros pertenecientes a Grupos Armados margen de la Ley FARC, Por lo tanto se configura la causal de eximente de responsabilidad como es el HECHO DE UN TERCERO.Adicionalmente no se configuran los elementos para endilgar imputación al Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, habida consideración de la inexistencia de prueba del daño y de la precaria imputación táctica y jurídica que se hace por parte de la demandante, como quiera que realiza una hipótesis de responsabilidad sobre la base de obligaciones por la afectación de los derechos constitucionales fundamentales amenazados y/o vulnerados.Como se observa del contenido de la demanda, no se puede afirmar que el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, tenga la función de ejercer labores de seguridad y protección personal por cuanto esta se encuentra en cabeza de otros organismos del Estado. Y por lo tanto mal podría endilgarse responsabilidad alguna en los hechos que dieron como resultado el desplazamiento forzado de la parte actora.Tal y como señala el demandante, los hechos victimizantes corresponden a actividades terroristas perpetradas por presuntos integrantes del grupo armado al margen de la ley Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, como son las constantes presiones y ataques a la población civil, incursiones, amenazas.De conformidad con el artículo 217 de la Carta Política establece:"La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea.Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional"No es, la demandada la llamada a prestar protección a los particulares ya que la función primordial y de orden constitucional, es la defensa de la soberanía del territorio nacional. Y en ningún caso la guarda personal o escolta de todos los colombianos, la cual está a cargo de los distintos organismos del Estado, previo estudio de sus condiciones de seguridad.Dentro del acápite de los hechos en que funda las pretensiones la parte demandante, brilla por su ausencia aspectos tácticos de orden concreto frente a una hipotética omisión y la falta de posición de garante que permitan endilgar responsabilidad a la demandada, como quiera que no fue puesta en conocimiento de tal situación ante las autoridades del Estado para el caso sub judice el Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, lo cual habilita la procedencia de esta excepción. Igualmente en el acápite de los hechos no se menciona, como tampoco se acredita participación alguna de los miembros de las FFMM, que ocasionaran afrenta contra la integridad personal de la parte demandante Señor ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, y los bienes objeto de abandono. |
| **CAUSAL DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - HECHO DE UN TERCERO**Los hechos generadores del perjuicio aquí alegados no son atribuibles a mí representada, pues se asevera tal y como lo indica que fueron perpetrados por hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la Ley FARC.De hecho, se tiene que la conducta objeto de reproche no corresponde a un hecho perpetrado por el estado, ni se indica de manera cierta y precisa en qué forma incidió la conducta objetiva al deber de cuidado y la posición de garante de los Estamentos Estales en la producción del daño alegado, ni siquiera se sindica por parte del demandante cuales fueron los sujetos activos de las conductas delictivas señaladas (miembros de las FFMM) y no aparece en el expediente prueba que permita determinar quién la perpetró, Según narra el apoderado los hechos se centran por la presencia de miembros de las FARC-EP para el año de 1986 en la vereda Bajo Ceiba- Municipio de Bolivar - Departamento de Santander, y posteriormente en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del TolimaAl demostrarse que la entidad demandada no es esponsable de la conducta asumida por un tercero que no tiene ninguna relación con la entidad, se configura un elemento de ruptura del nexo causal en el caso que nos ocupa, y se edifica la causal de eximente de responsabilidad como es el Hecho de Un Tercero.Teniendo en cuenta lo anterior, no surge del análisis de los hechos alguna intervención del Estado para poder predicar su responsabilidad por los perjuicios causados a la parte actora bajo ningún régimen de responsabilidad, toda vez que la prueba allegada hasta el momento, permite concluir que el supuesto desplazamiento y la muerte del Señor SILVESTRE LOPEZ para el año de 1987 fue perpetrado por miembros de un grupo insurgente, tal y como lo afirma el propio apoderado, es decir por miembros pertenecientes a las FARC. |
| **EL HECHO DE UN TERCERO, CAUSA REAL, DIRECTA Y EFICIENTE DEL DAÑO**Teniendo en cuenta la forma como se desarrollaron los hechos, no es posible atribuir responsabilidad alguna a la entidad demandada, toda vez que el daño fue causado por un tercero (grupos armados al margen de la ley y pertenecientes a las FARC-EP Si bien es cierto que el Estado, tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse que sea responsable de su comisión en todos los eventos; ya que son imputables a él solo cuando han tenido como causa la acción u omisión de uno de sus agentes, o facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo como causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ella.Como se puede evidenciar no se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad de mi representada por que existe el rompimiento del nexo causal exonerativa del HECHO DE UN TERCERO. |
| **INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD**En el proceso, no hay elementos de juicio suficientes que conduzcan inequívocamente a establecer la responsabilidad de entidad demandada |
| **LA INNOMINADA**Interpongo esta excepción frente a toda situación que resulte probada en el presente proceso y que beneficie de hecho y/o derecho los intereses de la entidad que represento. |

* 1. **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**
		1. El apoderado de la parte **DEMANDANTE** no presentó alegatos de conclusion.
		2. El apoderado de la parte demandada **POLICIA NACIONAL** manifestó: *“(…) Respecto del artículo 2o de la Carta Política de 1991, y en general de todas las normas constitucionales y legales que asignan la obligación de protección a los ciudadanos, hay que decir que su contenido obligacional es de medio y no de resultado, ya que las autoridades están para lo que allí se indica, pero no pueden garantizar en términos absolutos todas las manifestaciones de la delincuencia subversiva (autodefensas, guerrillas, delincuencia común, organizada, etc.), que actúan a la manera terrorista, a mansalva, sobre seguros, amenazando a la población civil, y sobre todo, utilizando el factor sorpresa que casi siempre impide la oportuna acción del Estado para contrarrestarlo.*

*Si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido la relatividad de las obligaciones del Estado, reconociendo las limitaciones de sus obligaciones cuando se encuentra imposibilitado para evitar el daño a la vida y bienes de los ciudadanos, con fundamento en el principio según el cual "nadie está obligado a lo imposible", al respecto citada corporación, afirma:*

*44 ...Es cierto que la jurisprudencia ha considerado que la relatividad de las obligaciones del Estado, esto es, no le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas cuando son causados por los particulares, en consideración a que las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que "nadie está obligado a lo imposible". (Negrilla fuera del texto)*

*El Consejo de Estado ha dispuesto también en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de 1991, que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que, esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible".*

*Dentro de la filosofía del Estado social de derecho, no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias, que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos "...pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumhrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos", de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas suponen un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. (Negrilla fuera del texto).*

*En este orden de ideas, atendiendo que la señora demandante ANA BERTILDA FLOREZ MURCIA, NO PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL, ni muchos solicito protección por el presunto desplazamiento, acaecido en el año 2010, en la vereda el cañón de las hermosas en el Municipio de Chaparral del departamento de Tolima, donde al parecer se vieron obligados a abandonar sus bienes y tierras, no están llamadas a prosperar las pretensiones, considerando que no hay una falla del servicio por acción u omisión de protección por parte de la Policía Nacional y además, según la misma demanda se trata de un hecho perpetrado por personas al margen de la ley, es decir, la acción directa de un tercero.*

*(…)*

*Dada las condiciones de imprevisibilidad de la acción terrorista, es evidente que las autoridades policiales y demás organismos de inteligencia, no tuvieron la oportunidad de haber previsto los hechos, ni mucho menos de prepararse oportuna y adecuadamente para repelerlo, en el entendido que los hechos de desplazamiento forzado tratan de situaciones que escapan del control de las autoridades públicas, a quienes no se les puede exigir que cumplan con su deber de protección a la comunidad donde ejerce su jurisdicción cuando las circunstancias de modo, tiempo y lugar son en todo sentido imprevisibles e irresistibles (…)”*

* + 1. El apoderado del EJERCITO NACIONAL señaló: *“(…) La parte actora pretende declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, por la totalidad de los presuntos daños y perjuicios causados a los demandantes, por las presuntas omisiones y fallas del servicio y/o riesgo excepcional endilgables a las demandadas y por la ausencia de garantías estatales propias de la posición de garante frente a la población civil en situación de vulnerabilidad por el conflicto armado interno, situación que derivó en un daño desde aquel instante y con el tiempo un perjuicio que no se ha consolidado hasta la fecha, por el desplazamiento forzado de las demandantes con ocasión de los hechos ocurridos por las amenazas de Muerte y Desplazamiento forzado ^del grupo familiar demandante, ocurrido el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil "diez (2010) en la vereda Cañón de las Hermosas. Municipio de Chaparral -Departamento del Tolima*

*Así las cosas, una vez recaudadas todos y cada uno de los medio de prueba, como son entre otros el Oficio Rad. 2157 MDN-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR6-BICAI-EJE-CJM-29.25 de fecha 18 de abril de 2018, expedido por el Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°. 17 "Gral. José Domingo Caicedo" del Ejército Nacional, por medio de la cual informa "Que verificando el archivo físico de la Sección de Operaciones y de la Unidad no se encontró registro alguno que evidencia oficio allegado por parte de la Personería Delegada para los Derechos Humanos UAO de Puente Aranda, ni de ninguna otra autoridad pública de la declaración rendida por parte de la Señora ANA BERTILIA FLOREl MURCIA, el día 25 de Agosto de 2010, por los hechos victimizantes padecidos por la demandante y su núcleo familiar.*

*Así las cosas, para efectos de establecer si existe o no responsabilidad de la Nación -Ministerio de Defensa - Ejército Nacional en el presente caso, es menester traer a colación, la existencia de tres elementos fundamentales:*

*1) el daño antijurídico sufrido por el interesado,*

*2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o*

*equivocada, y finalmente,*

*3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.*

*Respecto a lo anterior y con base en la respuesta otorgada por el Batallón de INFANTERIA n°. 17 "Gral. José Domingo Caicedo" de Chaparral Tolima, está acreditado probatoriamente que no se objetivizo daño por presunta omisión, como quiera que la Señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA Y SU NUCLEO FAMILIAR, no puso en conocimiento de las autoridades los hechos de que trata el presente caso, por lo tanto le era imposible a la administración adoptar cualquier medida conducente en aras de conjurar la amenaza y/o peligro del cual era objeto el accionante. En ese orden de hechos no se individualiza la concreción de un daño antijurídico en la vida, y bienes jurídicamente tutelados en cabeza de la parte actora.*

*Por lo anterior, se configura la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual de La Nación - Ministerio de Defensa, tal y como quedó corroborado con los medios de prueba (…)”*

* + 1. El **MINISTERIO PUBLICO** no presentó concepto.
	1. **CONSIDERACIONES**
	2. **ESTUDIO DE LAS EXCEPCIONES:**
		1. Frente las excepciones de **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA** propuesta por la POLICIA NACIONAL y **CADUCIDAD POR DESPLAZAMIENTO FORZADO y MUERTE DEL SEÑOR SILVESTRE FLOREZ, FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZAS MILITARES - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA** presentadas por el apoderado del MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONALel despacho se remite a lo resuelto en el acápite respectivo.
		2. En relación con las excepciones **EXCEPCION FALTA DE CONFIGURACION Y ESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, EXCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE POLITICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LA REPARACION POR DESPLAZAMIENTO FORZADO** e **INEXISTENCIA DE CONFIGURACION DEL ELEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD: IMPUTACION** propuesta por la POLICIA NACIONAL, **INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD** interpuesta por el apoderado del MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONALno gozan de esta calidad, en atención a que los hechos que se aducen como fundamento de la misma, no la conforman, limitándose simplemente a negar o contradecir los supuestos de hecho en que los demandantes sustentan su acción. En este sentido, el término “excepción”, está reservado para aquéllos únicos casos en que tal instrumento de defensa, se traduce en la acreditación de hechos y razones distintos, encaminados a excluir, enervar o dilatar las pretensiones.
		3. En cuanto a la excepción de **HECHO DE UN TERCERO** propuesta por la POLICIA NACIONAL y **CAUSAL DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - HECHO DE UN TERCERO** y **EL HECHO DE UN TERCERO, CAUSA REAL, DIRECTA Y EFICIENTE DEL DAÑO** presentado por la NACION – MINSITERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL por tratarse de un eximente de responsabilidad, se estudiará sólo en el evento en que aquella se configure. Por ende, se procederá a determinar si en el sub examine si se verifican todos y cada uno de los presupuestos que permitan la responsabilidad de las demandadas.
		4. En relación con la excepción **LA INNOMINADA** planteada por ambos demandados, sólo puede considerarse como un llamado al Despacho para que en caso de encontrar una causal que pudiera enervar las pretensiones de la demanda, así lo indique, por lo que se tendrá en cuenta, advirtiendo que a la fecha no encuentra ningún motivo que impida proferir una decisión de fondo en este asunto.
	3. **LA RAZÓN DE LA CONTROVERSIA:**

Conforme a lo determinado en la FIJACIÓN DEL LITIGIO, se busca establecer si las demandadas NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL deben responder por los presuntos perjuicios causados a los demandantes por las presuntas amenazas de muerte y desplazamiento forzado del grupo familiar de la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, hecho al parecer el día 24 de marzo de 2010, en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.

Surge entonces el siguiente problema jurídico:

***¿Deben responder las demandadas NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL por las presuntas amenazas de muerte y desplazamiento forzado del grupo familiar de la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, ocurrido en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, el dia 24 de marzo de 2010?***

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

El presente proceso tuvo su origen en el ejercicio de la acción de reparación directa contemplada en el artículo 86 del C.C.A., el cual dispone que el interesado podrá demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado al que obedece tal acción, tiene su fundamento Constitucional en el artículo 90 de la Carta, el cual le impone a aquel el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, es decir que el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber legal de soportar.

Se observa entonces que no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella; no obstante, la jurisprudencia continúa aplicando los regímenes de imputación de responsabilidad que de tiempo atrás ha ido decantando, ya que ellos facilitan el proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación de la existencia del daño y del nexo causal de éste con aquella.

El principal régimen de imputación de responsabilidad es el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales:

1) el daño antijurídico sufrido por el interesado,

2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente,

3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.

Así las cosas, si alguno de los elementos no se prueba, la falla en el servicio no se configura y por ende las pretensiones de la demanda deberán ser negadas. Una vez probada la falla en el servicio la única forma de que la parte demandada puede exonerarse de responsabilidad es acreditando alguno de los eximentes de responsabilidad como son culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero y fuerza mayor o caso fortuito.

Considera el Despacho que en el presente caso, el régimen de responsabilidad aplicable es el del FALLA EN EL SERVICIO en virtud de los hechos relatados en la demanda, por lo que se procederá al estudio del caso concreto teniendo en cuenta los elementos de responsabilidad anotados en el numeral anterior y el material probatorio aportado a la demanda.

* 1. **ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS:**
		1. Conforme al material probatorio aportado se **encuentran PROBADOS los siguientes hechos**:
* La señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA es madre de los menroes JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ[[8]](#footnote-8) y YESICA MAYERLY CUEVAS FLOREZ[[9]](#footnote-9)
* El 25 de marzo de 2010 la Personeria Delegada para los derechos humanos UAO PUENTE ARANDA hace constar que la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA en nombre propio y en representación de su grupo familiar conformado por sus hijos JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ y YESICA MAYERLI CUEVAS FLOREZ, rindió declaracion juramentada sobre su situación de desplazamiento, ya que se encuentra en tramite la respectiva evaluación e inscripción en el Registro Unico Nacional de Perrsona Desplazadas por la Violencia[[10]](#footnote-10).
* El **21 de septiembre de 2010** **la Personera Municipal del Municipio de Cachipay certifica** que la señora **ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA junto con su núcleo familiar** conpuesto por sus hijos JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ y YESICA MAYERLI CUEVAS FLOREZ **son personas desplazadas por la violencia, residentes en la finca San Luis ubicada en la vereda el Tolú, Jurisdiccion de ese municipio, quienes se encuentran registradas desde el 20 de Abril de 2010**[[11]](#footnote-11).
* El **1 de abril de 2015** **la Señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA rinde declaración extraporceso** en el que indica “Soy madre cabeza de hogar y **fui desplazada de Chaparral, Tolima desde el 25 de marzo de 2010**, junto con mis dos (2) hijos JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ identificado con tarjeta de identidad No. 1000158645 de Bogotá, DC, esa fecha tenía 07 años y YESICA MAYERLI CUEVAS FLOREZ, identificada con la tarjeta de identidad No. 1.070.385.083 de Bogotá, D.C., en esa fecha de 05 años de edad. Estamos radicados en Bogotá D.C., desde que fuimos desplazados.”
* En las respuestas a derechos de petición del 4 y 10 de marzo de 2015 en el que se señala que la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA y su grupo familiar se encuentran incluidos en el Registro Único de Victimas – RUV desde el 20 de abril de 2010 y que tienen derecho a recibir 17 – 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento en que se pague, el cual será dividido en partes iguales entre todas las personas que conforman el grupo familiar[[12]](#footnote-12)
* El 20 de febrero de 208 el Comandante del Depratamento de Policia del Tolima manifiesta que una vez verificada la Informaicon que reposa en la base de datos del Grupo de Analisis y Administracion de Informacion Criminal no se encontró información referente a recepción de solicitud de protección, denuncia o querella de la señora ANA BERTILDA FLOREZ MURCIA CON HECHOS SUCEDIDOS EN EL “Cañon de las Hermosas” del municipio de Chaparral para el año 2010[[13]](#footnote-13).
* El 12 de abril de 2018 el Comandante del Batallon de Infanteria No. 17 “Gral Jose Dom,ingo Caicedo” informa que verificando el archivo físico de la sección de operaciones y d ela Unidad nos e encontró registro alguno que evidencie oficio allegado por parte de la personería Delegada para los Derechos Humanos UAO de Puente Aranda ni de alguna otra autoridad pública, de la declaración rendida por parte de la sñeora ANA BERTILDA FLOREZ MURCIA el dia 25 de agosto de 2010, por los hechos victimizantes padecidos por la demandante y su grupo familiar[[14]](#footnote-14).
	+ 1. Respondamos ahora el interrogante planteado: ***¿Deben responder las demandadas NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL por las presuntas amenazas de muerte y desplazamiento forzado del grupo familiar de la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA, ocurrido en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, el dia 24 de marzo de 2010?***

El **daño** alegado por los demandantes se fundamenta en el desplazamiento forzado y amenazas de muerte incluidas todas las condiciones personales que esto conlleva, generado a la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA y su grupo familiar, compuesto por sus hijos JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ y YESICA MAYERLI CUEVAS FLOREZ, es de aclarar que el desplazamiento se encuentra demostrado con la certificaciones allegadas y las actuaciones adelantadas ante la Unidad Para la Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas – UARIV.

Del acervo probatorio que obra en el expediente no se desprende que efectivamente existió una omisión por parte de las demandadas NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y POLICIA NACIONAL en la prestación de un adecuado y eficiente servicio de protección y asistencia a los civiles entre ellos la señora ANA BERTILIA FLOREZ MURCIA y su grupo familiar, compuesto por sus hijos JOSE ESTIVEN CUEVAS FLOREZ y YESICA MAYERLI CUEVAS FLOREZ mientras se encontraban en la vereda Cañón de las Hermosas, Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima.

No está demostrado que las autoridades de la fuerza pública tuvieran conocimiento de un peligro colectivo representado por grupos armados al margen de la ley operando en la zona, amenazando a los civiles, reclutando menores o que omitieron adoptar medidas para atender el riesgo que a juicio de este despacho no es claro en su notoriedad.

Tampoco se puede endilgar responsabilidad a las autoridades de considerar que era previsible el actuar de grupos armados al margen de la ley, menos si el demandante afirma que no efectuó denuncia de alguna anomalía para provocar una intervención directa por parte de autoridad alguna.

Al no configurarse los primeros elementos de la responsabilidad por falla, el hecho imputable a los demandados a título de falla y el daño, no puede lógicamente configurarse el tercer elemento de la responsabilidad: el **nexo causal** entre éstos.

En las circunstancias anteriores, al no haberse acreditado los elementos de la responsabilidad por falla, ésta no se configura y las pretensiones de la demanda deben ser denegadas.

* 1. Se **CONDENARÁ EN COSTAS** a la PARTE ACTORA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que remite al Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso.

Elartículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala *“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”*

Por su parte, los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso y para la fijación de las agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Por último, mediante Acuerdo No. 1887 de 2003, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establece las tarifas de agencias en derecho, señalando en su capítulo III, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, numeral 3.1.2. en los asuntos de primera instancia, inciso segundo, de los procesos con cuantía, que se condenará a la parte vencida en juicio hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

La subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera ha indicado que cuando no hay gastos no hay costas. Sin embargo, este despacho considera que las agencias en derecho hacen parte de las costas, por lo tanto sí hay lugar a su reconocimiento.

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y gestión realizada por el apoderado de la parte demandada, se fija como agencias en derecho el **0,1%** de las pretensiones solicitadas dentro del proceso.

En mérito de lo expuesto, **el JUZGADO TREINTA Y CUATRO (34) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUÍTO DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y, por autoridad de la Ley,**

**FALLA:**

**PRIMERO: Declárense** no probadas las excepciones propuesta por las demandadas

**SEGUNDO:** **Niéguense** las pretensiones de la demanda

**TERCERO:** **Fíjense** como agencias en derecho de la apoderada de la parte demandada la suma de $331.246,608[[15]](#footnote-15)

**CUARTO:** Se **condena en costas** a la parte actora, liquídense por secretaria

**QUINTO:** Notifíquese a las partes del contenido de esta decisión en los términos del artículo 203 del CPACA.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OLGA CECILIA HENAO MARIN**

Juez

MSGB

1. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

1DS - OF - 0001 Página 3 de 35 Aprobación: 07/04/2014

VER: 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. ' Sentencia de fecha enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006), Consejo De Estado, Sección Tercera, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00213-01 (AGÍ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), Sección Tercera, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Radicación número: 20001-23-31-000-1998-03713-01(18436).

1DS - OF - 0001 Página 7 de 35 Aprobación: 07/04/2014

VER: 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. T-222 de 2008

1DS - OF - 0001 Página 9 de 35 Aprobación: 07/04/2014

VER: 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Constitucional, sentencia T-737 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Además, también se puede consultar las sentencias T-706 y T-159 de 2011, T-737, T-528 T-515 de 2010 y T-l 115 de 2008, entre muchas otras. [↑](#footnote-ref-6)
7. Con salvamento de voto del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa [↑](#footnote-ref-7)
8. FOLIO 10 DEL C2. [↑](#footnote-ref-8)
9. FOLIO 10 DEL C2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Folio 10 del c2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Folio 11 del c2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Folios 29 a 31 del c2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Folio 194 del cuaderno principal. [↑](#footnote-ref-13)
14. Folio 207 del cuaderno principal. [↑](#footnote-ref-14)
15. Valor aproximado al 0.1% de las pretensiones solicitadas 424 SMLMV ($331.246.608) [↑](#footnote-ref-15)